

Sr. Didier Reynders
Comisario de Justicia

Sr. Thierry Breton
Comisario de Mercado Interior

Comisión Europea

La Guajira, Colombia, 19 de noviembre 2021

RE: La propuesta de legislación sobre gobernanza empresarial sostenible

Estimado Comisario Reynders, Estimado Comisario Breton,

Me dirijo a usted como miembro del pueblo Wayuu de La Guajira, Colombia, en relación con la propuesta de legislación sobre Gobierno Corporativo Sostenible. **Le pedimos que se asegure de que la legislación prevé un acceso efectivo a la justicia para quienes son víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, incluido mi pueblo, que ha sufrido como consecuencia de la mina de carbón del Cerrejón.**

La mina de carbón a cielo abierto del Cerrejón, en La Guajira, Colombia, lleva más de tres décadas afectando gravemente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Más de 20 comunidades han sido desplazadas a la fuerza y a menudo con violencia para dar paso a las actividades mineras. Muchos ríos y arroyos han sido contaminados por los residuos tóxicos vertidos en nuestros ríos y el polvo tóxico de la mina ha afectado gravemente a nuestra salud durante años. El Arroyo Bruno, una de nuestras fuentes de agua más importantes, ha sido desviado de su curso natural para que la empresa pueda extraer el carbón que hay debajo.

Tenemos una relación espiritual con nuestro territorio y con el agua: es una extensión de nuestra propia vida, arraigada en nuestros usos y costumbres tradicionales. Al dañar nuestra tierra y el agua, Cerrejón ha estado violando la profunda conexión entre nuestra tierra y territorios, y nuestra identidad cultural y espiritual y nuestros derechos. Estos ataques contra nuestro entorno natural son también ataques contra nuestra propia comunidad, nuestra forma de vida y nuestras necesidades básicas. Estamos soportando los enormes costes culturales, espirituales y medioambientales de la mina, incluidas las graves violaciones de los derechos humanos, mientras que apenas recibimos beneficios de las ganancias que genera.

Nuestro territorio se ha convertido en una zona de sacrificio en aras de las empresas multinacionales que suministran combustibles fósiles nocivos a Europa en plena crisis climática. Mientras nosotros sufrimos, las empresas europeas se benefician de la destrucción de nuestro paisaje sagrado a través de sus cadenas de valor. Esto incluye a las tres multinacionales que han sido propietarias conjuntas de la mina durante la mayor parte de las dos últimas décadas, BHP, Glencore y Anglo American (que operan en el mercado de la UE y, por tanto, podrían estar cubiertas por la legislación), así como su

filial con sede en Irlanda, la Coal Marketing Company (CMC), que vende y comercializa el carbón. También incluye a empresas energéticas que han comprado millones de toneladas de carbón a Cerrejón durante más de 20 años, como la estatal Irish Electricity Supply Board (ESB).

Los abusos contra los derechos humanos en Cerrejón están bien documentados desde hace años, pero las empresas implicadas, especialmente las que se encuentran al final de las cadenas de suministro por las que pasa, no han tomado medidas serias para prevenir o mitigar los daños.

Esta es nuestra tierra ancestral, que nuestras abuelas y padres han cuidado durante generaciones. Sin embargo, cuando los inversores extranjeros vienen a cambiar irremediamente el paisaje, no se nos consulta, se silencia nuestra voz. Mientras tanto, las empresas internacionales despliegan equipos de abogados, agencias de relaciones públicas y asesores de opinión para defender su proyecto. Una nueva legislación en la UE, si es efectiva, podría garantizar que nuestras voces, y las de las comunidades en situaciones similares, sean escuchadas cuando se opongan a estos proyectos.

En Colombia, hemos buscado la reparación de los daños que hemos sufrido, pero se nos ha negado la justicia. Más de diez sentencias y resoluciones de los tribunales colombianos y otras autoridades no han sido aplicadas por los responsables en Colombia. El Estado no nos ha protegido. Cerrejón ha incumplido múltiples sentencias judiciales colombianas y ha ignorado el llamamiento de varios destacados expertos en derechos humanos de la ONU para que se suspendan las operaciones de la mina. En 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recomendó a Irlanda "considerar la posibilidad de dejar de comprar carbón de la mina de Cerrejón". Incluso cuando hay una orden judicial a favor de las comunidades o alguna sanción contra las empresas, entonces empezamos a recibir amenazas contra nuestras vidas y nuestras familias.

En colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil colombiana e internacional, también hemos presentado quejas formales ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en Irlanda, Reino Unido y Suiza, pero los PNC sólo pueden recomendar a los Estados que tomen medidas. Queremos mecanismos legales que obliguen a las empresas a actuar, y que nos permitan llevar los casos contra estas empresas a los tribunales. Las empresas deben ser consideradas responsables del daño que causan, al que contribuyen o del que se benefician.

Ahora, nos enfrentamos a un nuevo obstáculo, ya que algunas de las empresas pretenden retirar su inversión en la mina y tememos que nos quedemos sin acceso a la justicia por lo que hemos sufrido.

El cierre de la mina debe hacerse de forma responsable y progresiva, respetando nuestros derechos humanos y con una completa restauración medioambiental. Sin una vía internacional efectiva para la justicia, corremos el riesgo de quedarnos sin remedio por los agravios que hemos sufrido y el daño infligido a nuestra tierra y agua. Los responsables no deberían poder marcharse sin ofrecernos un remedio efectivo y una reparación completa.

Ahora mismo, somos un pueblo al borde de la extinción. Eso es lo que nos espera si se permite que la situación actual continúe.

Hemos oído que ustedes tienen el poder de hacer algo al respecto. **Nos alegramos de que la Comisión esté planeando una legislación que establezca obligaciones jurídicamente vinculantes para que las empresas respeten a las personas y al planeta, pero una ley sin disposiciones de responsabilidad para que las empresas rindan cuentas y que permita el derecho legal a la justicia para las víctimas será una enorme oportunidad perdida y un daño más para nuestro pueblo.**

Sabemos que algunos de los daños causados a nuestras comunidades y al medio ambiente son irreparables. Pero aún estamos a tiempo de asegurarnos de que tenemos acceso a una justicia real, y de que en el futuro las empresas europeas no podrán beneficiarse de la violación de nuestros derechos. **Le instamos a que presente una ley sólida sobre derechos humanos y diligencia debida**

obligatoria que incluya la responsabilidad de las empresas y el acceso a la reparación para las víctimas de los abusos empresariales.

También queremos subrayar que la lucha por la justicia no es sólo para nosotros, sino para aquellos que en todo el mundo sufren como consecuencia de las acciones de las empresas con sede y actividad en la UE.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards.

LUIS MISAEL SOCARRAS IPUANA

C.C. 77032086

Mr Didier Reynders
Commissioner for Justice

Mr Thierry Breton
Commissioner for Internal Market

European Commission

La Guajira, Colombia, November 19, 2021

RE: The proposed Sustainable Corporate Governance legislation

Dear Commissioner Reynders, Dear Commissioner Breton,

I am writing to you as a member of the Wayuu people in La Guajira, Colombia, regarding the proposed Sustainable Corporate Governance legislation. **We call on you to ensure that the legislation provides for effective access to justice for those who fall victim of corporate human rights abuses, including my people, who have suffered as a result of the Cerrejón coal mine.**

The Cerrejón open-pit coal mine in La Guajira, Colombia, has been severely affecting indigenous, Afro-descendant and farming communities for over three decades. More than 20 communities have been forcibly and often violently displaced to make way of mining activities. Many rivers and streams have been contaminated by the toxic waste dumped in our rivers and toxic dust from the mine has severely affects our health for years. The Arroyo Bruno (Bruno Stream), one of our most important water sources, has been diverted from its natural course so that the company can mine the coal that lies underneath.

We have a spiritual relationship with our territory and water – it is an extension of our very life, rooted in our traditional practices and customs. By damaging our land and water, Cerrejón has been violating the deep connection between our land and territories, and our cultural and spiritual identity and our rights. These attacks against our natural environment are also attacks against our very community, our way of life and our basic needs. We are bearing the huge cultural, spiritual and environmental costs of the mine, including grave human rights violations, while receiving little benefit from the profits it generates.

Our territory has become a sacrificial zone for the sake of multinational companies supplying harmful fossil fuels to Europe in the midst of the climate crisis. While we suffer, European companies are reaping the benefit of the destruction of our sacred landscape through their value chains. This includes the three multinationals who have jointly-owned the mine for most of the past two decades, BHP, Glencore and Anglo American (which all operate on the EU market and could therefore be covered by the legislation), as well as their Ireland-based subsidiary the Coal Marketing Company (CMC), which sells and markets the coal. It also includes energy companies who have purchased millions of tonnes of coal from Cerrejón for over 20 years, such as the state-owned Irish Electricity Supply Board (ESB).

Human rights abuse at Cerrejón has been well documented for years, but the companies involved, particularly those as the end of the supply chains it's drawn along, have not taken serious action to prevent or mitigate harm.

This our ancestral land, which our grandmothers and fathers have cared for for generations. Yet, when foreign investors come to irremediably change the landscape, we are not consulted - our voices are silenced. Meanwhile, international companies deploy teams of lawyers, PR agencies and spin doctors to defend their project. New legislation in the EU, if effective, could ensure our voices, and those of communities in similar situations, are heard when opposing such projects.

In Colombia, we have pursued remedy for the harms that we have suffered, but we have been denied justice. More than ten court rulings and resolutions from Colombian Courts and other authorities haven't been implemented by those responsible in Colombia. The state had failed to protect us. Cerrejón has failed to comply with [multiple Colombian court judgments](#) and ignored the call from several prominent [UN human rights experts](#) for the mine's operations to be suspended. In 2019, the UN's Committee on the Elimination of Racial Discrimination recommended that Ireland "consider stopping purchasing coal from the Cerrejón mine". Even when there is a court order in favour of the communities or any sanction against the companies, we then start to receive threats to our lives and our families.

In partnership with several Colombian and international civil society organisations, we have also filed formal complaints with the OECD National Contact Points in Ireland, the UK and Switzerland – but the NCPs can only *recommend* states to take action. We want legal mechanisms that compel companies to act, and that enable us to take cases against these companies in court. Companies must be held liable for the harm they cause, contribute to or profit from.

Now, we face a new hurdle as some of the companies are looking to withdraw their investment in the mine and we fear that we will be left without any access to justice for what we've suffered. The closure of the mine must be done responsibly and progressively, in respect of our human rights and with full environmental restoration. Without an effective international path to justice, we risk being left in denial of remedy for the wrongs we have suffered and the damage inflicted on our land and water. Those responsible should not be able to leave without delivering us effective remedy and full reparation.

Right now, we are a people on the verge of extinction. That is what awaits us if the current situation is allowed to continue.

We have heard that you have the power to do something about this. **We welcome that the Commission is planning legislation that will establish legally binding duties for businesses to respect people and the planet – but a law without liability provisions to hold companies accountable and enabling legal rights to justice for victims will be an enormous missed opportunity and a further harm to our people.**

We know that some of the damage that has been done to our communities and environment can never be repaired. But there is still time to make sure that we have access to real justice, and that in the future, European companies will not be able to profit from violating our rights. **We urge you table a strong law on mandatory human rights and due diligence that includes liability for companies and access to remedy for victims of corporate abuse.**

We would also like to emphasise that the struggle for justice is not just for us, but for those all over the world who suffer as a result of the actions of companies based and operating in the EU.



LUIS MISAEL SOCARRAS IPUANA

C.C. 77032086